

CHILE DESPUÉS DEL AUTORITARISMO: NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Jorge A. Peña Aguilar
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA, UCV

Resumen:

Se presenta un análisis preliminar de las condiciones económicas y sociopolíticas que han estado presentes en Chile a partir de 1990, cuando se inaugura el régimen político formalmente democrático que sucede al militar. Para ello, se ubica ese análisis en el ámbito de la relación que se da en América Latina entre economía y política en la coyuntura actual, dada la implementación del proyecto societal neoliberal; así como algunas de las consecuencias más importantes para la región derivadas del proceso de globalización. El comportamiento de la economía es visto a través de algunas variables fundamentales; y se discute lo relativo a la concepción y práctica de la democracia, la democratización y el problema de la consolidación democrática.

Palabras claves: Economía, política, globalización, proyecto sociopolítico, neoliberalismo, pobreza, desempleo, democracia, democratización, consolidación democrática.

INTRODUCCIÓN

Chile es el caso de reestructuración capitalista en el sentido neoliberal que más tempranamente se inicia en América Latina. A la vez, es el país que puede mostrar más éxitos, tanto desde el punto de vista de las variables macroeconómicas como de la institucionalización que alcanza, lo cual ha significado una gran estabilidad y continuidad del proyecto que el régimen autoritario implantó. El proyecto en marcha es también claramente funcional a la actual fase por la cual atraviesa el sistema capitalista, la globalización.

Una cabal comprensión de la emergencia del proyecto societal neoliberal y del conjunto de transformaciones ocurridas en la sociedad chilena producto de la acción de ese proyecto, debe considerar por lo menos dos órdenes de factores. Por una parte, la situación interna, expresada en una crisis política que se resuelve por la vía del golpe de Estado, en 1973, y de un régimen autoritario de casi diecisiete (17) años de duración, con innegables efectos hasta la actualidad, ya que lleva a cabo la reestructuración del capitalismo interno. Por otra, los elementos externos que estuvieron presentes desde la ocurrencia misma del golpe de Estado -particularmente la acción de los Estados Unidos-, como también en el retorno a la democracia, así como en la continuidad que se observa hasta el presente de un capitalismo "refundado" en el marco de las transformaciones que el sistema capitalista viene experimentando desde la década de los setenta, que ha configurado lo que conocemos como proceso de globalización.

El objetivo central de este trabajo es el análisis, de manera preliminar, de las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas que han estado presentes en Chile en el período de vigencia del régimen político "democrático" a partir de marzo de 1990, cuando asume la Presidencia de la República el demócrata cristiano Patricio Aylwin, elegido con el apoyo de la Concertación de Partidos por la Democracia.¹

Para dar cumplimiento al objetivo señalado, en una primera parte, se hace un planteamiento general acerca de la situación en América Latina entre economía y política, señalando la especificidad que la misma tiene en la actualidad. En segundo lugar, hay una referencia al proceso de globalización y a la participación que al subcontinente latinoamericano le viene correspondiendo en el mismo, poniendo énfasis en las consecuencias de diverso orden que ese proceso ha generado para los países de la región. En tercer término, se realiza una presentación y análisis de algunos elementos que se consideran centrales en la evaluación de la economía chilena en el proceso de transición. Así, por una parte, utilizando datos oficiales en relación a las tendencias de variables macroeconómicas fundamentales, se hace una presentación de las tendencias centrales que la economía chilena presenta en el período 1990-1998. Por la otra, siempre en base a información oficial y de organismos como la Cepal, además de la que proporcionan estudiosos del tema, se señala un conjunto de consecuencias que el proceso ha tenido y tiene en lo social y político. Por último, en la parte relativa a "democracia, democratización y consolidación de la democracia" se discute, en primer lugar, la cuestión relativa a la concepción y a la práctica de democracia que tienen vigencia en el contexto del régimen político que se inauguró en marzo de 1990. En segundo término, se realizan algunos planteamientos relativos al proceso de democratización que ha operado desde 1990 hasta el presente. Finalmente, tomando en cuenta todo lo planteado precedentemente, se discute el problema de la consolidación de la democracia.

1. ECONOMÍA Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA. UN PLANTEAMIENTO GENERAL

En la actualidad, América Latina presenta un mapa político que muestra que todos los gobiernos, con la excepción de Cuba, son el resultado de procesos electorales, lo cual constituye algo inédito en la región. Y ello ocurre en medio de

¹ Esa coalición política tiene como eje a los Partidos Demócrata Cristiano y Socialista. Agrupa, además, a un conjunto de actores que expresan una gama que va desde lo que fue conceptualizado como "derecha democrática" hasta sectores de la "izquierda ortodoxa", pasando por la Social Democracia, con la excepción del Partido Comunista y otros grupos menores.

circunstancias bastante particulares: crisis económica general, globalización mundial, una integración regional subordinada, fragmentación y exclusión social internas, hegemonía del proyecto societal neoliberal, ausencia de proyectos alternativos, entre los elementos más resaltantes.

Todo lo anterior debe tener algún significado. Son posibles muchas preguntas: ¿Cómo funcionan la legitimidad y el consenso, si la base material para la democracia es todo lo débil que implica la crisis? Los niveles y la calidad de vida han experimentado un deterioro notable a partir de la década de los setenta. Sin embargo, ello no parece ir acompañado por una actividad política de contenido popular, ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las características más relevantes de los ciudadanos de hoy? ¿Qué pasa en la cultura política y en la manera de hacer política? ¿Qué ocurre en relación a los contenidos y a la manera de implementar los mecanismos que tienen que ver con la ideología dominante? ¿Qué ha sucedido con los proyectos de corte socialista, hasta hace poco, con tantos adeptos?

No se pretende aquí dar respuesta a todas las interrogantes planteadas. Ello rebasa la intención de estas líneas. En todo caso, algo parece claro y es que el proceso económico y el proceso sociopolítico en América Latina, por un tiempo indeterminado, pero considerable, estará vinculado a los efectos de la aplicación de medidas de corte neoliberal para la superación de la crisis que afecta a la región, incluido el endeudamiento externo.

Igualmente, los problemas que tienen relación con la cuestión democrática, la democratización y la consolidación de la democracia, asuntos centrales en el discurso político predominante en la región, se encuentran sobre la mesa de discusión. Es, sin duda, idea central de ese discurso político desterrar definitivamente la posibilidad de regresiones autoritarias.

El objetivo del proyecto es la modernización en el sentido más amplio de la expresión. Esta incluye, como cuestión primordial, la modernización económica, aspecto éste que se ha convertido en prerequisite y meta para el desarrollo. Adquiere un carácter de necesidad en un doble aspecto: por una parte, se trata de reestructurar el capitalismo interno de la región y de cada país y, por otra, con el cumplimiento de lo anterior se busca una redefinición sustancial de la inserción de ese capitalismo en el concierto internacional. También resulta imprescindible, en el discurso dominante, la modernización política. Esto supone una redefinición radical del sistema político, en especial del papel del Estado; implica la necesidad de su reforma: descentralización, regionalización, privatización son conceptos ya familiares para el ciudadano. Y es indiscutible que se avanza en tal sentido. Ahí están, para demostrarlo, los casos de Chile, Argenti-

na, Perú, Bolivia; más recientemente Brasil, y ahora Venezuela, entre los más conspicuos.

Pero, junto con todo lo anterior, hay una realidad inescapable, y es la que tiene que ver con los niveles de pobreza y empobrecimiento que se constatan a la par de la puesta en práctica de las políticas de ajuste que resultan "imprescindibles" para la modernización que conducirá al bienestar general según el discurso neoliberal.

Los logros en la consecución de los buscados equilibrios macroeconómicos no han estado acompañados de resultados igualmente exitosos en el campo de la distribución de los beneficios. En la actualidad, en América Latina, la mayoría de la población es cada vez más pobre (Klisberg, 1993,1996). Por decir lo menos, una dimensión importante de la democracia, la socioeconómica, está fallando. Además, es de hacer notar también que nunca está del todo claro cuál es el contenido que se le otorga a la idea de democracia, y ello es algo por demás importante de precisar, ya que es obvio, salvo que se quiera ignorar tal cuestión, que éste es un término que acepta muy distintas connotaciones.

Por último, se puede afirmar que los pilares de la relación entre economía y política, en la concepción del proyecto dominante en la región, son la economía de mercado y la democracia representativa en la versión neoliberal. Ambas cuestiones resultan imprescindibles para el logro de la inserción en la globalización, lo cual se considera requisito indispensable para entrar, por fin, en la vía de un crecimiento estable y sostenido. Este, por su parte, desde la óptica neoliberal, es el único camino que permitirá la superación de los problemas sociales que presenta la región, dado el "efecto derrame" que se espera que ocurra cuando se haya alcanzado la tan ansiada estabilidad macroeconómica y se logren niveles "adecuados" de crecimiento.

2. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN. AMÉRICA LATINA, UN PARTICIPANTE SUBALTERNO

La globalización, que es el resultado del proceso de crisis y transformación que experimenta el capitalismo mundial a partir de finales de los años sesenta, y que marca una nueva fase de su desarrollo, no es un término de significado unívoco. Sin duda conlleva una carga ideológica importante. Como proceso tampoco muestra resultados semejantes según se trate del capitalismo desarrollado o del que se ha convenido en denominar "en vías de desarrollo".

En todo caso, a grandes rasgos, puede sostenerse que al proyecto neoliberal, sea éste más o menos asumido por los diferentes actores políticos y sociales, le acompaña una visión por demás optimista de los resultados que arrojará

la inserción en el proceso de globalización para América Latina. Es sugerente que el discurso siempre maneja el tiempo de un futuro indeterminado cuando se trata de efectos que tienen que ver con el bienestar de la gente. Y se llega a planteamientos como el ya célebre de Francis Fukuyama (1993) sobre el "Fin de la Historia".

Así, se entiende que la globalización, en sus aspectos económico, financiero, político y cultural sólo producirá beneficios, ignorando toda una gama de problemas que el proceso está generando, incluyendo al mundo desarrollado, y que tienen que ver con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza, con el ensanchamiento de la brecha entre desarrollo y subdesarrollo -y también al interior de ambos-, niveles de pobreza hasta ahora desconocidos en el mundo desarrollado, altas tasas de desempleo, entre los aspectos más relevantes (Arenas y Sonntag, 1994; Peña y Vergara, 1998).

Para América Latina, es indudable que las profundas transformaciones que el capitalismo y el sistema internacional han experimentado en la actualidad, ha significado consecuencias negativas si se observa el problema desde la perspectiva de las mayorías. En efecto, ahora la región es más pobre y se han acentuado los problemas de desigualdad social. Altos niveles de desarrollo y de estándares de vida de una minoría coexisten con la miseria y la exclusión de una mayoría sin perspectivas reales de superación (Cepal, 1995, 1996, 1997, 1998).

El problema es que Latinoamérica, como el mundo subdesarrollado en general, una vez más es el socio menor del proceso, con la salvedad, por supuesto, de los sectores "internacionalizados" de estas sociedades. Este es un punto de la mayor importancia. La lógica del modelo que se impone en la actualidad, en el contexto de la globalización, no permite visualizar, con criterio de realidad, que pueda darse una superación de la crisis latinoamericana, si por ello se entiende no sólo alcanzar equilibrios macroeconómicos, sino además el bienestar general de la población. Los patrones productivos, con su alto componente de innovación tecnológica, la pérdida relativa de la importancia de las materias primas de las cuales dispone la región, la preeminencia de las actividades económicas especulativas y de servicios por sobre las productivas, y aún éstas, que con la incorporación de los avances científico-técnicos se vuelven cada vez más incapaces de ser fuentes generadoras significativas de empleo estable y bien remunerado, la relación asimétrica, en fin, entre desarrollo y subdesarrollo, así lo muestran hasta ahora.

3. LA ECONOMÍA EN EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. CONSECUENCIAS SOCIALES

El esquema económico que instauró el régimen militar chileno, parte de un diagnóstico que atribuye al modelo de desarrollo hacia adentro, con sus correlatos de régimen político democrático y proceso de democratización, las razones de un crecimiento económico desequilibrado por la interferencia de los componentes redistribucionistas y participacionistas del mismo. Desde el Estado se habrían ejecutado políticas demagógicas de protección de una industria ineficiente y de otorgamiento de privilegios a diferentes sectores sociales, afectando negativamente el proceso de acumulación y entabando el papel de la competencia en los mercados.

El gobierno de Patricio Aylwin (1990 -1994), desde un primer momento decidió no alterar el modelo económico establecido por el régimen militar, y el de Eduardo Frei (1994 -2000) ha continuado en esa línea. Sólo se planteó introducirle un componente de equidad que debía ir haciendo sentir sus resultados a medida que se avanzara en la realización de algunos cambios. En efecto, estudiosos y políticos importantes, que podían exhibir un trabajo significativo de análisis sobre el proceso de la dictadura, coincidían en que si bien no podía pensarse en reimplantar el modelo económico previo al instaurado por el régimen militar, tampoco era viable la continuidad de ese modelo, si lo que se pretendía era llevar adelante un proceso de democratización, concebido éste como una de las bases de la sociedad democrática que se buscaba reconstruir. En otras palabras, era menester un nuevo modelo, que incorporara equidad y justicia, y ello era una de las tareas más importantes para el nuevo régimen democrático.

Ha transcurrido tiempo suficiente como para hacer una revisión, aunque sea de carácter preliminar, sobre lo alcanzado en el sentido que se viene señalando. Se trata, en última instancia, de establecer algunas comparaciones entre la situación de la economía, tal como la dejó el régimen militar, y la que presenta en la actualidad, cuando han transcurrido ya algo más de nueve años de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, habida consideración que el caso chileno, en el discurso neoliberal, se ha constituido en el ejemplo a seguir por los demás países latinoamericanos.

Es innegable que se han logrado éxitos importantes por la economía de libre mercado. En efecto, algunas cifras permiten ilustrar, de manera breve, cuál es la situación económica en Chile. Así, desde el punto de vista macroeconómico -privilegiado siempre por los neoliberales-, se puede constatar que las reformas llevadas a cabo, tales como la privatización, la desregulación económica, la creación de un mercado de capitales, la política cambiaria, etc., produjeron resultados que interesaron al mundo económico internacional.

Cuadro 1
Variación del Producto Interno Bruto e Inflación Años 1989-1998
Porcentajes a precios de 1980

<i>Año</i>	<i>PIB</i>	<i>Inflación</i>
1989	9,7	21,4
1990	3,3	27,3
1991	6,8	18,7
1992	10,6	12,7
1993	5,9	12,2
1994	4,1	8,9
1995	9,9	8,2
1996	7,0	6,6
1997	7,1	6,0
1998	4,0 (*)	4,3 (**)

(*) Estimación preliminar.

(**) Variación entre noviembre 1997 y noviembre 1998.

El promedio anual de variación del producto interno bruto, entre 1981 y 1990 fue de 3,0%, calculado a precios de 1995; entre 1991 y 1998 llega a 6,9%, siendo esta última la más alta de América Latina en el período. La variación acumulada alcanza a 58,7% (CEPAL, 1995,1998). Esto expresa un crecimiento ininterrumpido a lo largo de los últimos quince (15) años. Sin embargo, el año 1998 muestra una disminución del crecimiento a lo largo del año (7,9% en el primer trimestre y 2,7% en el último) y una baja de 3,1% en relación al año anterior (CEPAL, 1998). Por lo demás:

Aún obviando las distorsiones por la forma de medición (en la masa de remuneraciones se incluyen los sueldos de todos los empleados dependientes incluidos las plantas ejecutivas de las empresas, y en el excedente se consideran tanto los ingresos de los trabajadores por cuenta propia como los excedentes de la micro empresa), lo que las cifras muestran es una clara concentración del crecimiento: los excedentes aumentan más velozmente que el producto y que las remuneraciones, lo cual equivale a decir que el crecimiento se distribuye en favor de los patrones (Agasino, 1996, 60).

La inflación, que en 1989 fue de 21,4%, y en 1990 -primer año de gobierno del Presidente Aylwin- de 27,3%, a partir de 1991 comienza una baja sostenida hasta llegar al 4,3% estimado para 1998 (CEPAL, 1996, 1998). Sin duda se trata de un logro notable en el contexto latinoamericano.

Ahora bien, si se consideran algunas otras variables de importancia y de carácter menos abstracto, que tienen la posibilidad de expresar con más claridad la

situación del elemento humano, tomando información que proporciona la CEPAL sobre la base de datos oficiales, se puede ver, en cuanto al desempleo a nivel nacional, la siguiente evolución: 7,9% en 1989; 7,8% en 1990; 8,2% en 1991; 6,7% en 1992; 6,5% en 1993; 7,8% en 1994; 7,4% en 1995; 6,4% en 1996; 6,1% en 1997; y 6,1% en 1998 (cifra preliminar) (CEPAL, 1998). Cabe señalar, además, que en el trimestre diciembre 1998-febrero 1999, el desempleo sube a 7,5% (INE, 1999).

Por otra parte, se observa una mayor incidencia del desempleo en los casos en los cuales se combinan juventud y pobreza. La población en situación de pobreza (el quintil inferior) muestra, en efecto, un desempleo de 35,0% en el tramo de edad comprendido entre los 15 a 24 años y de 25,2% en el de 20 a 24 años. Igualmente, la desocupación es considerablemente mayor en la población pobre en general. Por último, en cuanto a género se puede ver que también se relacionan pobreza y sexo en relación al desempleo. En el quintil más pobre, el desempleo afecta al 12,4% de los hombres y al 26,1% de las mujeres. En cambio, en el quintil más rico los porcentajes son 1,4% y 1,7% respectivamente (Mideplan, 1997). Por su parte, la CEPAL señala que el incremento del desempleo golpea fuertemente el ingreso de los hogares más pobres. En 1995, por ejemplo, se registra una disminución de empleados por hogar en el decil inferior, conjuntamente con una baja del ingreso promedio. En efecto, del desempleo urbano total, un 23,5% corresponde al 10% más pobre de la población (CEPAL, 1995 b, 20).

Es de hacer notar, además, que el crecimiento del PIB ha estado basado en un aumento de la productividad laboral, y que la generación de empleo tiende a estar concentrada en el sector de los servicios. En el sector de la industria manufacturera y la construcción, se ha mantenido el nivel del empleo en términos absolutos, disminuyendo su participación en la composición de la ocupación, mientras en el sector agropecuario se observó la continuación del descenso, aun en términos absolutos (CEPAL, 1996, 1998).

Siguiendo los datos del estudio del Ministerio de Planificación y Cooperación, es posible observar que en 1987, al 20% más pobre le correspondía el 4,3% del ingreso; en 1990, el 4,4%; en 1992, éste alcanzó a 4,6%; en 1994, baja a 4,3%; y en 1996 continúa la baja a 4,1%. En el otro extremo, el de los más ricos, la distribución era la siguiente: en 1987, el 20% más rico se apropiaba del 57,2% del ingreso; en 1990, del 56,9%; en 1992, del 56,3%; en 1994 del 56,9%; y en 1996 del 56,7%. Dentro del 20% de más altos ingresos, en todos los años considerados, el 10% más rico supera el 41% en la participación en la distribución (Ver cuadro 2).

En términos absolutos, el ingreso mensual promedio del 10% de los hogares más pobres llegó a 57.393 pesos (139 dólares), en tanto que el del 10% de los más ricos alcanzó a 1.654.518 pesos (4.013 dólares). En términos individuales, el ingreso medio per cápita del 10% más pobre fue de 12.878 (31 dólares) pesos y el de los más ricos de 520.289 pesos (1.262 dólares) (Mideplan, 1997).

Cuadro 2
Distribución personal del ingreso monetario según deciles: 1987-1996 (*)
Porcentajes

Decil	Año				
	1987	1990	1992	1994	1996
1	1,5	1,6	1,7	1,5	1,4
2	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7
3	3,6	3,7	3,8	3,6	3,6
4	4,3	4,5	4,7	4,6	4,6
5	5,4	5,4	5,6	5,6	5,5
6	6,3	6,9	6,6	6,4	6,4
7	8,1	7,8	8,0	8,0	8,1
8	10,9	10,3	10,4	10,5	11,0
9	15,9	15,1	14,7	15,3	15,4
10	41,3	41,8	41,6	41,6	41,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Mideplan. Encuestas CASEN 1987, 1990, 1992, 1994 y 1996.

(*) Corresponden a los ingresos monetarios autónomos más transferencias monetarias efectuadas por el sector público: pensiones asistenciales, subsidios únicos familiares y asignaciones familiares.

El propio Banco Mundial (1996), señala que la distribución del ingreso en Chile es una las más regresivas del mundo, sólo comparable a las de Brasil, Sudáfrica, Zimbabwe y Guatemala. La relación de ingreso per cápita mensual de 1 a 50 entre los deciles 1 y 10, así lo confirma.

Evidentemente, la concentración del ingreso no sólo es altísima sino que, además, tiende a profundizarse en los últimos años. En efecto:

... Con los datos distributivos de la CASEN 1996 y considerando los tamaños de hogar informados por las Encuestas del INE para 1995 se puede estimar que, en 1996, aproximadamente unas 985 mil personas captaron el 41,3% del ingreso, mientras un millón 761 mil percibieron sólo el 1,4% de éste, situación peor que la existente incluso en 1987. En Chile, hoy, según la misma CASEN, los *ingresos promedios del decil de hogares más ricos son casi 29 veces mayores a los ingresos*

del decil de hogares más pobres. Y si se comparan sus ingresos medios per cápita, el ingreso de un rico típico supera en más de 50 veces el ingreso medio de un pobre (Agasino, 1997, 5-6).

Como resulta evidente, desde que gobierna la Concertación de Partidos por la Democracia, se observa la tendencia señalada a la profundización de la desigualdad en la distribución del ingreso según los datos de que se dispone. El mejor año distributivo fue 1992. A partir de ese año, el 20% de los hogares más pobres (deciles 1 y 2) disminuyó su participación en el ingreso desde el 4,6% al 4,1% en 1996. Por el contrario, el 20% de los hogares más ricos (deciles 9 y 10) incrementó la suya de 56,3% a 56,7% en el mismo período. Los sectores medios, aunque de manera leve, también ven afectada negativamente su participación en el ingreso, la cual disminuyó en 0,3% (deciles 5 y 6).

Según la información oficial correspondiente a 1994 (Mideplan, 1996), el 70% de los chilenos tenía un ingreso que no superaba los 81.322 pesos en las zonas urbanas y 42.773 pesos en las rurales, cantidad que convertida en dólares al valor de ese momento, significaba unos 194 y 102 dólares² respectivamente, suma que habla por sí sola acerca de cuál es la situación de la mayoría de la población. El segmento más pobre, decil 1, apenas alcanzaba un ingreso de 12.175 pesos en las ciudades y 8.386 pesos en las zonas rurales (29 y 20 dólares) según el mismo informe. En ese momento, el Ministro Maira, de Mideplan, señalaba que, en los últimos dos años, a pesar de haberse registrado un crecimiento importante, la distribución del ingreso se había hecho más regresiva. La relación entre crecimiento elevado y regresividad de la distribución del ingreso aparece, hasta ahora, como un rasgo estructural del modelo económico vigente en Chile.

El problema de la pobreza resulta ineludible. Aunque ésta ha disminuido en relación a la que dejó el régimen militar desde el 45,1% en 1987 a 23,2% en 1996 (Mideplan, 1997), se puede observar que el ritmo en que ello ha ocurrido, a partir de 1993 ha disminuido de manera importante. Esto pudiera estar evidenciando la existencia de un "techo" estructural, y que en lo sucesivo las magnitudes tiendan a estabilizarse. Si se toman cifras absolutas esta afirmación aparece más clara. En el bienio 1990 -1992 la pobreza disminuyó en 634 mil personas; entre 1992 y 1994 en 552 mil y en 1994 -1996 en 492 mil personas. En cuanto a la indigencia o pobreza extrema, entre 1990 -1992, ésta se redujo en 490 mil personas; entre 1992 -1994 en 133 mil y en 222 mil en 1994 - 1996. Aunque es

² Para hacer las conversiones se ha usado el valor promedio del año correspondiente de la divisa norteamericana que aparece en International Monetary Found (1999), *International Financial Statistics*, February.

cierto que en este último período, tanto en términos absolutos como relativos, la reducción fue mayor que la de la fase inmediatamente anterior, no lo es menos que fue significativamente inferior a las disminuciones absolutas y relativas de los períodos 1990 -1992 y 1987 -1990. Por lo demás,

Esta reducción de la pobreza se explica sobre todo por el aumento de los ingresos del 40% de los hogares más pobres, y no por una mejoría de su participación en la estructura distributiva. Estamos, por tanto, ante una sociedad que aun cuando tiene menos pobres no es necesariamente más equitativa. La brecha de ingresos sigue siendo enorme (Ottone, 1995,10).

Es necesario agregar que el fenómeno de la pobreza muestra una distribución desigual a lo largo del territorio. Así, las Regiones IX, VIII, VII, X y IV, en ese orden, tienen incidencia de pobreza entre el 36,5% y 30%; las Regiones III y VI muestran una pobreza algo mayor al 25%; las Regiones V, XI y I presenta niveles entre 25% y 20%; y las Regiones II, Metropolitana y XII, con la proporción más baja, 16,6% y 13,4% (Mideplan, 1997). Además,

Hay sectores, y quizás los mayoritarios en el país, cuya pobreza no se origina tanto en la falta de trabajo, sino en la mala calidad del empleo, en lo bajo de sus remuneraciones, en la falta de seguridad social, en el no cumplimiento de las leyes laborales mínimas y otros factores de esta naturaleza (Valdés, 1995, 103).

La cantidad de hogares pobres se mantiene por encima de las magnitudes existentes en el período 1977-1981, y la cantidad es aún mayor que la que existía entre 1970-1973, según los datos oficiales (Mideplan, 1996, 48).

Resulta pertinente señalar, además, que, desde el punto de vista estadístico, es considerado pobre el hogar en el cual el ingreso por persona es inferior a dos veces el valor de una canasta básica de alimentos, mientras que se considera indigente al hogar que tiene un ingreso per cápita inferior al valor de una canasta básica de alimentos (Mideplan,1997). Evidentemente, la forma de determinar el nivel de la pobreza y de la indigencia, no contempla otros indicadores fundamentales para la calidad de vida. En efecto, cuestiones tales como el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, áreas verdes, recreación, posibilidades de acceso a la educación, a la salud, entre otras, no son tomadas en cuenta. A todo esto habría que agregar que la pobreza también incluye la ausencia del derecho a opinar y participar, cuando, de hecho, se tiene una ciudadanía de segundo orden.

Hay otros elementos que resultan sugerentes, si se pretende obtener algún tipo de conclusión sobre la situación económica en Chile: el de los niveles de ganancias del capital, por una parte, y el de la expansión hacia afuera, por otra. Es frecuente encontrar, en las páginas de *The Wall Street Journal Americas*, en

la sección What's News, informaciones como las que, a modo de ejemplo, se citan a continuación:

Copec, consorcio chileno declaró un aumento de ganancias de 26,8%, a US\$ 424,4 millones en 1995 en comparación a 1994. El incremento se debe en parte a la recuperación internacional de los precios de la celulosa y la harina de pescado.

Colbún, eléctrica de Chile, declaró un aumento de ganancias de más de 60%, a US\$ 38,5 millones en 1995, en comparación con el año anterior (*El Nacional*, 23-2-96, Economía, 5).

Endesa, eléctrica de Chile, estudia la construcción de una planta electrogeneradora en Brasil, posiblemente en Minas Gerais. También se esperaba que la empresa informara ayer si participaría en la privatización de la eléctrica brasileña Ligh (*El Nacional*, 29-3-96, Economía, 5).

Polar, embotelladora chilena, aprobó una ampliación de capital de más de US\$ 40 millones para financiar la compra reciente de cinco embotelladoras en Argentina. Polar tuvo utilidades de US\$ 6,7 millones en 1995, un 62% más que en 1994 (*El Nacional*, 26-4-96, Economía, 5).

Es obvio que la economía chilena ha experimentado un crecimiento significativo, al punto que se ha venido expandiendo fuera de sus fronteras de manera importante en áreas diversas, incluida la bancaria. La compra del Banco Consolidado, de Venezuela, efectuada por el holding financiero Infisa es sólo un ejemplo de ello. Sin embargo, los datos aportados demuestran que ese crecimiento se corresponde con un alto nivel de concentración del ingreso, así como con una altísima tasa de ganancia.

Por otra parte, la concepción neoliberal niega rotundamente, a nivel de su discurso, cualquier tipo de subsidio. Ello no es compatible con las bondades del mercado. A pesar de ello, se puede señalar que los subsidios existen, y claramente en favor del capital, tratándose, además, de un capital de magnitud importante, sea éste nacional o extranjero. Efectivamente, a modo de ejemplo se puede citar a la Corporación de Fomento de la Producción en relación al "Estímulo a la instalación de empresas intensivas en la ocupación de mano de obra". Allí se establece:

Para las empresas que ocupen mano de obra de la zona se ha establecido un subsidio a la capacitación laboral de UF 30 (US\$ 800) por trabajador y de entre UF 30 (US\$ 800) y UF 80 (US\$ 2.100) como subsidio para entrenamiento en el trabajo.

Este beneficio opera para empresas con proyectos nuevos o proyectos de ampliación por un valor superior a US\$ 300 mil.

Los incentivos alcanzan a UF 110 (US\$ 2.900) por trabajador contratado en las comunas de Curanilahue, Lebu y Los Alamos; a UF 80 (US\$ 2.100) para las comunas de Lota y Coronel, y a UF 60 (US\$ 1.600) para el resto de las comunas de la provincia de Arauco. En todos los casos, el incentivo se cancela en el lapso de un año y medio. Este estímulo se otorga tanto a las empresas productivas como a las de servicios y puede operar antes de la puesta en marcha de la actividad productiva (CORFO, 1994, 4).

Cabe indicar que los subsidios alcanzan, además, a "cofinanciamiento de estudio de prefactibilidad", "subsidio a la precalificación de jóvenes", "subsidio por mano de obra contratada", "estímulo a promotores de inversión" y "subsidio a la instalación en Parque Industrial". Así, en un caso presentado en el documento ya citado de la CORFO, se otorgó un subsidio de US\$ 926.000 a una empresa que adelanta un proyecto en el sector maderero por un valor de US\$ 4 millones, lo que equivale a un 23% de la inversión.

Todo lo indicado anteriormente remite a dos cuestiones centrales. El crecimiento económico se encuentra estrechamente asociado a la expansión de los grandes grupos económicos y a una lógica económica que no permite, en términos reales, que haya una distribución menos desigual de los resultados. Así, la CEPAL señala:

Vinculado al tema de la pobreza se vuelve a plantear el de la distribución del ingreso. (...) En países con altos índices de crecimiento económico se mantienen, o incluso se amplían, los grados de desigualdad. En Chile, por ejemplo, la coalición de gobierno ha sometido estos temas al debate público, y de ahí han surgido diferentes apreciaciones, tanto sobre los cálculos estadísticos como sobre posibles soluciones, tales como gravar la bencina y los cigarrillos con el fin de recaudar los fondos necesarios para aumentar en 10% las pensiones inferiores a 100 mil pesos mensuales (alrededor de 250 dólares) (CEPAL, 1995,122).

Efectivamente, esto se hizo; pero puede observarse que se trata de un incremento que apenas supera la tasa de inflación en 1.7% en un ingreso por demás insuficiente.

La política económica que se ha adoptado en Chile, hasta ahora no muestra capacidad de introducir un elemento real de superación de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Introducir un cambio en la misma, por supuesto, depende de si existe o no voluntad política de hacerlo. En consecuencia, vuelve a plantearse el problema de las relaciones de poder en lo relativo a la cuestión de la desigualdad social y a las causas que la generan.

4. DEMOCRACIA, DEMOCRATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Puede afirmarse, sin ninguna duda, que el régimen militar que gobernó Chile desde el 11 de septiembre de 1973 y que hizo entrega del gobierno el 11 de marzo de 1990, significó la expresión más pura de la implantación del proyecto neoliberal en América Latina. Se puede sostener también, respecto de los resultados alcanzados por el gobierno militar, que en lo económico, medido por sus propios parámetros, no logró los objetivos que se planteó inicialmente. En efecto, el desarrollo "nacional", si por ello debe entenderse que éste alcance a todos los sectores de la sociedad, no fue conseguido. Por el contrario, aunque hacia su etapa final pudo mostrar logros positivos en términos de variables macroeconómicas, el resultado último de ese régimen terminó siendo una mayor y más profunda desigualdad social.

En lo sociopolítico, era posible observar una situación que evidenciaba una nueva forma de concebir la política y de hacer política en sectores importantes de la sociedad chilena. El individuo, entendido como "hombre económico", era el centro de esa concepción de la política y de su práctica. Había, por ende, un cambio en la idea misma de ciudadano.

Por otra parte, el régimen militar entrega una sociedad "cuasi estamentaria", con pérdida de la idea de nación, de comunidad como elemento aglutinador. Se trata de una realidad que muestra modos y estilos de vida que son expresión de la fragmentación y exclusión social, y que difieren tremendamente unos de otros. También se observa una falta de asociación entre crecimiento, equidad social y democracia política.

Así, para el régimen democrático que asumía el gobierno en marzo de 1990, se planteaban, en lo fundamental, las tareas que tenían que ver con la democratización en un sentido global, es decir, comprendía lo socioeconómico y lo sociopolítico. Además, estaba igualmente presente, como reto y como tarea, el iniciar el proceso que condujera a la consolidación de la democracia.

En términos concretos, todo lo anterior significaba superar las profundas desigualdades sociales existentes para ese momento, la integración de los sectores marginalizados, abrir vías efectivas y eficaces de canalización de demandas sociales y, por supuesto, transformar radicalmente el sistema político. Además, existía acuerdo en la necesidad de continuar el proceso de modernización, pero eliminando los elementos "perversos y desarticuladores" heredados del régimen militar.

El cumplimiento de los objetivos indicados suponía, por una parte, enfrentar y buscar salidas a la situación en la cual se encontraban amplios sectores de la

sociedad, a través de medidas redistributivas de aplicación inmediata, junto con un rediseño del modelo económico que había generado esos niveles de desigualdad, de modo que se revirtiera la situación de esos sectores sociales y se garantizara un presente y un futuro más equitativo para los mismos; por otra, modificar sustancialmente, en un sentido democratizador, el sistema político instaurado en la Constitución de 1981, junto con atacar la concepción política que se había hecho parte, en buena medida, de la cultura y de la práctica políticas. Y esto debía ser realizado con una participación ciudadana significativa como forma de darle contenido y fuerza al proceso de democratización política. En efecto:

Esto implica reponer las reformas constitucionales (senadores designados, sistema electoral, relaciones cívico-militares, etc.) que aseguren una plena democracia política y la capacidad de las mayorías políticas de gobernar sin vetos extrademocráticos, y completar el proceso de verdad y justicia y profundizar y extender el de reparación en materia de derechos humanos, con lo que ello implica de reforma de las instituciones judiciales (Garretón, 1993,23).

En la lucha por el logro de la transición a un régimen político democrático, la oposición expresada en la Concertación manejó una concepción de democracia que se puede considerar "mínima". Frente a una dictadura como la imperante en ese momento, puede haberse justificado que ello haya sido así. Pero logrado el tránsito a un gobierno democrático, la tarea era, como se indicó más arriba, convertir el régimen político en real y efectivamente democrático, al menos en la perspectiva del liberalismo democrático, puesto que la concepción que recogió la Constitución Política elaborada por el régimen militar corresponde a una visión neoliberal, la cual, por lo demás, era criticada por la Concertación de Partidos por la Democracia.

Desde una perspectiva histórica, la idea de democracia ha tenido una connotación de utopía, sin que ello haga referencia a un orden social ideal. En la medida en que se han asociado históricamente a esa idea valores y aspiraciones de igualdad, libertad, soberanía, equidad, justicia, participación, solidaridad, se está pensando como "un horizonte normativo que permite juzgar lo existente y explorar las posibilidades de su transformación" (Lander, 1994, 3-4).

La visión conservadora del régimen militar redefinió la idea y la práctica de democracia. La vació de contenido. Este ha sido, sin duda, uno de los mayores éxitos del proyecto refundacional del cual ese régimen fue portador. En términos concretos, desde el momento en que se pone fin a la dominación oligárquica, la práctica política democrática, más allá de sus fallas, había significado una cierta negociación en la búsqueda de acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad. Esto, en medida importante, implicaba ciertos niveles de organización y participación. El régimen militar eliminó la posibilidad de ese proce-

so, y los gobiernos democráticos posteriores a aquél, no parecen haber tenido capacidad, de una manera renovada, de recuperar, mejorar y ampliar tal contenido democrático.

Los antiguos partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Radical, etc., y otros nuevos, en la práctica han eliminado, o al menos "suspendido" indefinidamente, el ideal democrático que en el pasado inmediato tuvieron. Ahora impera lo posible y no hay lugar para la utopía. Se imponen el "realismo" y el "pragmatismo". En consecuencia, la idea de democracia que prevalece en el gobierno y en los partidos políticos de la Concertación, significa un retroceso respecto de las concepciones que esos mismos actores otrora habían defendido.

Este problema, expresado en términos de la relación poder-gobierno, muestra una situación novedosa. El contenido de las decisiones que se toman, en lo sustantivo, se corresponde con los intereses de los grandes grupos económicos y de la cúpula de las Fuerzas Armadas. El gobierno se suma a lo que aquéllos deciden, y administra, de modo un tanto conflictivo por supuesto, la aplicación de esas decisiones. Esto, obviamente no constituye nada nuevo en el capitalismo. Lo que sí es novedoso es que esa clase política, antes defensora real de intereses populares, ahora se ha vuelto sumamente tímida al respecto, y ha hecho suya la razón instrumental del pensamiento neoliberal; no tiene un proyecto sociopolítico propio y ha asumido el de los sectores dominantes. Continúa imperando la noción mínima y procedimental de democracia. La democracia ahora debe subordinarse al mercado; lo político debe estar por debajo de lo económico. Como sostiene Edgardo Lander:

... Es tal la transformación de la idea de democracia que se ha dado en las últimas décadas, como consecuencia del progresivo desprendimiento de sus dimensiones utópicas y normativas, que hoy podríamos hablar de una nueva especie, la democracia neoliberal, en la que el campo de lo político está estrictamente acotado, y la economía y el mercado tienen incuestionable hegemonía como criterios organizadores de la sociedad (Lander, 1994, 5).

La situación de Chile no se aparta de lo que sostiene Lander. El "realismo" que allí impera lleva a pensar lo que existe como lo posible, y a prácticamente negar la posibilidad de la ocurrencia de transformaciones significativas. La democracia parece haberse "congelado" en lo existente.

Ahora bien, abordar el problema de la democratización supone hacer ciertas precisiones. En primer lugar, el capitalismo nunca ha conducido a la igualdad, pero además, cuando se trata de América Latina, es necesario considerar que su implantación ha significado también:

... la destrucción de formas de vida y defensa de los sectores más vulnerables, la pobreza, las desigualdades sociales y desequilibrios regionales, la destrucción y derroche de recursos humanos y naturales, la dependencia científico-tecnológica, etc. (Garretón, 1993, 9).

Otra precisión de importancia tiene que ver con la concepción y definición de un modelo de desarrollo. Además del principio orientador de la acumulación, se requiere de formas de organización y de gestión, junto con considerar los aspectos sociales y político culturales. No bastan, por importantes que sean, tasas de crecimiento altas y el logro de equilibrios macroeconómicos. Se requiere, además de lo anterior, el consenso y el reconocimiento de la diversidad interna en relación a cuestiones tales como la organización social deseada, el sistema político que debe imperar, el tipo de inserción en el sistema económico internacional, la identidad cultural, etc.

La existencia de una economía de mercado hace referencia sólo a un conjunto de elementos de carácter instrumental que no constituyen una definición de un modelo de desarrollo que conlleve a la inclusión de los distintos sectores sociales. En Chile, por el contrario, medida en la forma que se indicó precedentemente, alrededor de una cuarta parte de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que implica que sectores sociales importantes están en una situación de exclusión, teniendo, por tanto, una condición de ciudadanos de segunda clase. Se trata, por ende, de una sociedad fragmentada en la cual la relación con la modernidad y la participación con la institucionalidad es profundamente desigual, lo cual pone en cuestión la idea misma de comunidad.

La estructura social, por otro lado, ha sufrido transformaciones profundas. Así:

... Quizá el rasgo más significativo sea la erosión de las formas de estratificación y movilidad sociales que caracterizaron el modelo de desarrollo hacia adentro y la tendencia mesocrática del sistema de oportunidades. Asistimos a la coexistencia de diversos sistemas de estratificación, que consagran una realidad para las grandes mayorías de la población en la que la correspondencia entre las dimensiones educativas y laborales tiende a desaparecer, se precariza el trabajo y el empleo, y aumenta la desigualdad de oportunidades en los ámbitos económicos y socio-culturales (Garretón, 1993, 10).

El crecimiento económico no ha ido acompañado de una reducción significativa de la desigualdad social, y ello es consecuencia directa del modelo neoliberal, que evidencia así su marcado carácter clasista y concentrador del crecimiento económico. La modernización por sí sola, contrariamente a lo que sostienen los neoliberales, no conduce al bienestar colectivo, sino que genera un determinado tipo de exclusión. Resulta, por ende, que son perfectamente com-

patibles, como lo afirma Lechner (1990), dos tendencias contradictorias: la dinámica de la integración a la transnacionalidad y la marginalización interna.

La conclusión en cuanto al problema de la democratización, es que en Chile los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, tienen muy poco que mostrar al respecto. De lo señalado en la parte relativa a los rasgos que han caracterizado el funcionamiento económico desde 1990 en adelante, en lo fundamental, se puede ver que se ha tratado de una continuidad con lo que estableció el régimen militar, con todo lo antidemocrático que ello supone. Además, en la dimensión sociopolítica ocurre prácticamente lo mismo. Se trata de una sociedad con altos niveles de desigualdad y fragmentación social. Sólo existe una ciudadanía igualitaria en el ámbito electoral.

Algunos datos contribuyen a dar fuerza a esta afirmación. En 1995, tres (3) de cada cuatro (4) pensionados recibía 50 mil pesos al mes, vale decir, alrededor de 119 dólares, situación en la que se encontraban 650.000 personas. Para 1996 estaba previsto un incremento de 10% para las pensiones de vejez y viudez inferiores a 100 mil pesos mensuales, lo cual alcanza a un millón de personas correspondientes a la primera categoría, y 150 mil de la segunda (Ministerio de la Secretaría General de Gobierno de Chile, 1995).

Es preciso no perder de vista que la cifra de 100 mil pesos es más bien un límite superior, que en términos reales, significa, en todo caso, que sólo un 25% de estas personas, es decir 250 mil reciben pensiones superiores a 50 mil e inferiores a 100 mil pesos, si se confronta la información con la que señala que 3 de cada 4 pensionados perciben ingresos de 50 mil pesos al mes.

Se señaló más arriba que el capitalismo jamás ha conducido a sociedades igualitarias. Pero también es cierto que hay diferencias evidentes de desigualdades según se trate de países del capitalismo desarrollado o del capitalismo dependiente. Acerca de lo que se quiere llamar la atención, como fue indicado, es que se está en presencia de una situación en la cual una parte importante de las fuerzas que han integrado los gobiernos posteriores al régimen militar fueron, en otro momento, portadores de proyectos transformadores y que, en la actualidad, se han convertido en administradores del proyecto neoliberal.

En lo relativo a la consolidación democrática, no resulta posible pensar ese problema con independencia de los anteriores, vale decir, éste necesariamente se encuentra vinculado a la concepción de democracia que domina en la actualidad en Chile y, además, al curso que tenga el proceso de democratización.

Evidentemente, la experiencia chilena y el proceso latinoamericano en general, ponen de manifiesto la concreción de un proyecto de dominación de nuevo

signo en la región, el cual se haya estrechamente relacionado con el proceso de globalización, que especifica el papel que corresponde al subcontinente en dicho proceso: "modernización dependiente", con todo lo que ello implica, en términos concretos, respecto a la desigualdad social y a la exclusión.

Se ha impuesto una concepción de democracia que, más allá del discurso -por lo demás siempre ambiguo-, lo que hace es vaciar de contenido la idea y la práctica democráticas. Así, la ciudadanía ahora tiene especialmente que ver con el mercado y el nivel microsocia. Hay una atomización de la sociedad y una descolectivización de sus demandas. Prevalece lo individual por sobre lo colectivo.

Obviamente, tanto los sectores dominantes como la clase política antes crítica y que ha hecho suyo el proyecto neoliberal, convirtiéndose en administradora del mismo, buscan, con un cierto nivel menor de contradicción, consolidar este funcionamiento. Y se encuentran apoyados, entre otras cosas, por una "cultura de masas" que tiende a formar un nuevo ciudadano: individualista y temeroso por la memoria de la experiencia dictatorial y/o por el temor a que ésta sobrevenga.

Aunque el mayor éxito del régimen militar fue alterar de manera significativa la subjetividad de la gente, tema éste muy poco estudiado por lo demás, no pueden dejar de ser tomados en consideración ciertos elementos de la realidad en relación al tema de la consolidación de la democracia en Chile. La existencia de una parte importante de la población en situación de pobreza, que no es objeto de convocatoria ni en el nivel político simbólico ni en el político práctico, constituye un elemento de fragilidad para la democracia y su consolidación. Es realmente difícil pensar en la consolidación de la democracia "actualmente existente", con los niveles de desigualdad y exclusión que la implementación del proyecto neoliberal no ha corregido. Es más, las políticas de ajuste no son medidas de emergencia de corto plazo, sino que son parte constitutiva de la lógica de largo alcance del funcionamiento del proyecto refundacional del capitalismo que han diseñado los organismos financieros internacionales y los sectores internos ligados a la transnacionalización en América Latina, y Chile constituye, sin duda, el caso más logrado al respecto. Esto, necesariamente imprime un sello determinado a las políticas económicas impuestas, al igual que a la práctica política.

Por último, pero no menos importante, hay una evidente crisis de proyectos alternativos y segundo sin embargo, no se trata del "Fin de la Historia".

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agasino, Rafael (1996), "Cinco ecuaciones 'virtuosas' del modelo económico chileno y orientaciones para una nueva política económica", *Economía y Trabajo en Chile. Informe Anual*, Programa de Economía del Trabajo, Santiago de Chile.
- (1997), "*Chile en los noventa: claroscuros, ilusiones y fisuras de una contrarrevolución madura*", Programa de Economía del Trabajo, Santiago de Chile.
- Arenas, Nelly y Heinz Sonntag (1994), "La globalización: una mirada desde América Latina", *Cuadernos del CENDES*, Año 11, Segunda Época, septiembre-diciembre, Caracas.
- Banco Mundial (1996), *From Plan to Market, World Development Report 1996*, Oxford University Press, New York.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1995a), *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1995*, No. 585/586, CEPAL, Santiago de Chile.
- (1995b), *Panorama social de América Latina 1995*, CEPAL, Santiago de Chile.
- (1997), *Social Panorama of Latin America 1996*, CEPAL, Santiago de Chile.
- (1998), *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1998*, CEPAL, Santiago de Chile.
- Corporación de Fomento de la Producción de Chile (1994), *Oportunidades de negocios para la industria maderera en la zona de Arauco-Chile*, CORFO, Santiago de Chile.
- El Nacional (1996), *Economía*, Ediciones: 18 de febrero; 23 de febrero; 29 de marzo y 26 de abril, Caracas.
- Fukuyama, Francis (1993), *El fin de la historia y el último hombre*, Planeta Colombiana Editorial S.A., Bogotá.
- Garretón, Manuel (1993), *La dimensión política de los procesos de transformación en Chile*, FLACSO, Programa Chile, Documento de Trabajo, Serie Estudios Políticos, No. 29, Santiago de Chile.
- International Monetary Found (1999), *International Financial Statistics*, February, New York.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (1996), *Encuesta de empleo primer trimestre de 1996*, INE, Santiago de Chile.

- (1999), *Encuesta de empleo primer trimestre de 1999*, INE, Santiago de Chile.
- Klisberg, Bernardo (1993 a), *Pobreza: un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*, Fondo de Cultura Económica/CLAD/PNUD, México.
- (1995) "El problema social en América Latina: dilemas e interrogantes", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, No. 1, enero-marzo, Caracas.
- Lander, Edgardo (1995), "Democracia liberal, modernización y utopía", *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*, UCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Caracas.
- Lechner, Norbert (1990), *¿Son compatibles modernidad y modernización?. El desafío de la democracia en América Latina*, FLACSO, Programa Chile, Documento de Trabajo No. 10, Santiago de Chile.
- Ministerio de la Secretaría General de Gobierno de Chile (1995), *Chile: balance 1995*, Editorial Antártica, Santiago de Chile.
- Ministerio de Planificación y Cooperación (1995), *Realidad económico-social de los hogares en Chile. Algunos indicadores relevantes, encuesta CASEN 1992-1994*, Mideplan, Santiago de Chile.
- (1996), *Balance de seis años de las políticas sociales: 1990/1996*, Mideplan, Santiago de Chile.
- (1997a), *Situación del empleo en Chile, 1996. Resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional*, Mideplan, Santiago de Chile.
- (1997b), *Pobreza y distribución del ingreso en Chile, 1996. Resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional*, Mideplan, Santiago de Chile.
- Ottone, Ernesto (1995), "Superación de la pobreza: Un enfoque desde la ciudadanía", *Revista de Trabajo Social*, No. 66, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.
- Peña, Jorge y Jorge Vergara (1998), "Globalización e integración regional en América Latina. Actualidad y perspectivas de investigación", *Globalización y regionalización. Su impacto en las soberanías nacionales*, ULA, Consejo de Publicaciones, Mérida.
- Valdés, Ximena (1995), "Trabajo social y pobreza", *Revista de Trabajo Social*, No. 66, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.